

Plaza pública

► *La elección en Baja California*

► *Los hombres y las tendencias*

Miguel Angel Granados Chapa

Baja California deberá estrenar gobernador en el siguiente turno de actividad electoral en el interior del país. Es la tercera solución a un problema de esta naturaleza que le compete al actual gobierno. Si bien el presidente De la Madrid no le era todavía cuando se designó a los candidatos al gobierno de Tabasco y de Jalisco, es claro que la voluntad determinante en los respectivos nombramientos de don Enrique González Pedrero y don Enrique Álvarez del Castillo fue la suya, y no la del entonces titular del Poder Ejecutivo federal. No es esta, en consecuencia, la primera sino la tercera sucesión local que le corresponde resolver.

Las dos primeras fueron, hasta donde puede saberse hoy, satisfactorias para la población, pues ya los gobernadores del caso están en ejercicio de sus funciones. Aunque ambos tienen larga carrera pública, no han sido sólo políticos y funcionarios, sino que también los caracteriza el uso de la razón política en la cátedra y la escritura. Como profesores y autores, González Pedrero y Álvarez del Castillo han asumido compromisos ideológicos generales, además de los particulares formulados durante sus campañas y al tomar posesión de sus cargos.

El esquema encarnado en esos dos mandatarios locales, no podrá repetirse en Baja California. Allí no hay el tipo de políticos como el representado en los casos precedentes. Antes al contrario, lo que prevalece es el género de políticos-empresarios, o políticos pragmáticos en puridad. Entre esos extremos tendrá que elegir el poder central.

Una de las cuestiones en juego en esta circunstancia es el papel que corresponderá al gobernador saliente, Roberto de Lamadrid. No es preciso trazar el retrato de su figura, bien conocida por la opinión nacional. La resaca contraria al lopezportillismo, corriente política a la que inequívocamente pertenece, le estorbará definitivamente y no estará en condiciones de votar en favor de un candidato determinado, y hasta es posible que le quite la posibilidad de vetar a quien juzgara contrario a sus intereses, que no son pocos ni ocultos.

Sabedor de que así es, el gobernador De Lamadrid ha ideado una estrategia elemental para hacer saber a los posibles aspirantes al gobierno que a él le deberán la designación, aunque ésta se produzca en total ausencia de la voluntad del próspero negociante. Cada semana ha lanzado, como si fuera el suyo, a un precandidato diverso. De esa manera el abanico de las cartas que él presuntamente maneja se ha hecho copioso y donde quiera que caiga el sucesor, el gobernador cree que podrá hacerle creer que su decisión contó para tal efecto, y sobre todo ante la opinión de los sectores interesados, De Lamadrid haría así clara su posición de elector.

No se requiere rascar mucho en la piel del fenómeno para saber que no será así. Roberto de Lamadrid no será actor en la decisión sobre el futuro del estado en que no nació pero al cual gobierna. Otra cosa, sin embargo, es que el candidato elegido pertenezca a su clan político o financiero. Consideraciones de otra naturaleza, inclusive relacionadas con traiegos de poder en el equipo gobernante en la capital de República pueden contar de modo determinante en la resolución de este caso y, por consiguiente, apuntar hacia un candidato-empresario.

Una de las razones de que así fuera es el temor, por entero fundado, a que el PAN capitalice buena parte del descontento y la rabia que en ese estado fronterizo se han gestado a partir del año pasado, por la crisis económica y la gestión de antes y de ahora para enfrentarla. Ya en ocasiones anteriores los ciudadanos de Baja California han utilizado el voto para expresar sus inconformidades, que nunca había alcanzado grados de exacerbación como ahora. Con mayor razón en esta oportunidad es posible que saquen raja de la crisis. Y para evitarlo, mediante un procedimiento muy discutible, el PRI opondrá al PAN a un militante de la especie de los priistas panificados. Ya veremos.